

Antofagasta, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés.

**Vistos:**

En estos autos Ingreso Corte N° 134-2023, que corresponde al RIT O-1446-2018 del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, sobre demanda laboral de incumplimiento de contrato de trabajo más indemnización de perjuicios por accidente del trabajo con resultado de muerte, por sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, se acoge la demanda deducida por el abogado Antonio Fernando Rojas Araya en representación de SERGIO FRANCISCO OLIVARES CASTILLO y de MARÍA CRISTINA VILLENA CARRILLO, como herederos de **FRANCISCO ESTEBAN OLIVARES VILLENA** trabajador fallecido; en contra de ASEA BROWN BOVERI S.A. ("ABB S.A.") representada por José Roberto de Paiva, y en contra de BIOSAR CHILE SpA (BIOSAR) representada por José Herrera Ahumada, y se condenó a las demandas a pagar a los demandantes la suma de \$400.000.000.- a título de indemnización por daño moral y la suma de \$392.000.000.- a título de indemnización por lucro cesante, debidamente reajustado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 del Código del Trabajo, disponiéndose que a las prestaciones señaladas deberá imputarse la suma de \$120.000.000.- pagado en transacción por EDF; y cada parte pagará sus costas.

En contra de esta sentencia el Abogado Antonio Fernando Rojas Araya por la parte demandante, interpuso recurso de nulidad, fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por haberse dictado la sentencia con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en relación con los artículos 2330, 22, 1545, 1546, 1547, 1556 y 1558, 2461 y 2462, todos del Código Civil.



También dedujo recurso de nulidad el Abogado Alonso García Echegoyen, en representación de la demandada BIOSAR CHILE S.p.A. fundado en la causal contemplada en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, por infracción manifiesta a las reglas de la sana crítica; y en subsidio de la causal anterior, invoca la causal contemplada en la letra e) del artículo 478 del Código del Trabajo, en relación al número 4 del artículo 459 del mismo texto, ya que la sentencia ha sido dictada con omisión del análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esta estimación.

Asimismo interpuso recurso de nulidad el Abogado Orlando Poblete Ortúzar, en representación de la sociedad demandada ABB S.A., fundado en la causal de nulidad del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, por haberse infringido en forma manifiesta las normas de apreciación de la prueba en conformidad con las reglas de la sana crítica en la determinación del monto a indemnizar por concepto de daño moral, y la misma causal deduce en relación con la determinación del monto a indemnizar por concepto de lucro cesante; igualmente invoca la causal del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, en lo referente a la valoración del porcentaje de reducción del daño en la exposición imprudente, siendo necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior.

Declarados admisibles los recursos se procedió a su vista, en la audiencia de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, oportunidad en que se escucharon los alegatos de las partes.

**CONSIDERANDO:**



**I.- En cuanto al recurso de nulidad de la parte demandante.-**

**PRIMERO:** Que la parte demandante recurre de nulidad de la sentencia por haberse dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, lo que dice relación con la exposición imprudente al daño declarada en la sentencia, y respecto de las siguientes normas: A) art. 2330 del Código Civil, B) art. 22 del Código Civil y C) de los arts. 1545, 1546, 1547, 1556 y 1558 del Código Civil. Y asimismo, invoca la misma causal en relación con los alcances de la transacción, respecto de los artículos 2461 y 2462 del Código Civil.

En cuanto a la infracción de normas en relación con la exposición imprudente al daño, señala que la sentencia acoge las alegaciones y defensas de las demandas en cuanto a la procedencia de la figura de exposición imprudente al daño o de la compensación de culpas consagrada en el art. 2330 del Código Civil deducida como defensa por las demandadas ABB y Biosar, dicha decisión se fundamenta en los considerandos cuadragésimo primero a cuadragésimo tercero, y en relación con esa norma la sentencia la ha aplicado en desmedro del trabajador fallecido respecto del que los causahabientes han demandado las indemnizaciones que le hubiesen correspondido al fallecido en su calidad de continuadores del patrimonio del causante; es decir, se ha demandado en representación del fallecido en su calidad de trabajador y en la posición o representación de éste por sus herederos, en tal sentido los demandantes han ejercido las acciones de indemnización transmitidas por el trabajador fallecido en el accidente del trabajo y legalmente se entiende que lo hacen en la misma posición



que el fallecido tenía en las relaciones jurídicas con los demandados de autos.

Que en tal contexto la sentencia al aplicar el art. 2330 del Código Civil yerra, puesto que olvida que el derecho laboral es esencialmente contractual, puesto que el estatuto laboral, es aplicable solo si nos encontramos ante un contrato de trabajo, por cuanto lo que se ha discutido es la responsabilidad contractual de los demandados, y no una responsabilidad extracontractual, siendo aplicable la norma antedicha tan solo al estatuto extracontractual, de lo que se sigue que la norma en cuestión no es aplicable al caso de marras, el que debe ser resuelto de conformidad a las normas del estatuto de responsabilidad contractual, y el hecho de ser un ámbito contractual implica rechazar institutos propios de la responsabilidad extracontractual como lo es el regulado en el art. 2330 del Código Civil.

También señala que para el caso de estimarse que dicho instituto sea procedente se requiere que la persona dañada haya incurrido en conductas culpables, cuestión que implica que de alguna forma tenía la posibilidad de actuar de una forma diversa, cuestión que en autos no se ha verificado, por cuanto el trabajador dada su calidad de tal se vio obligado a seguir las instrucciones de su empleador, quien no tomó todas las medidas eficaces para evitar el accidente de autos, pues le dio instrucciones al accidentado de trabajar en condiciones inseguras y con riesgos aumentados más allá de lo razonable; y en tal sentido, se debe considerar que las demandadas no han tomado todas las medidas de seguridad para preservar la vida del trabajador fallecido de conformidad a las normas de los art. 183-E y 184 del Código del Trabajo. Seguidamente, se debe considerar que en tales circunstancias la exposición



imprudente al daño no es producto del actuar del trabajador sino de las propias demandadas, cuestión que descarta la correcta aplicación del art. 2330 del Código Civil, por cuanto dicha norma exige una actuación imprudente por parte de la víctima y las demandadas no han cumplido con aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes, es decir las demandadas no han actuado con el sumo cuidado que se exige para el cumplimiento del deber de seguridad que pesa sobre ellas, exponiendo indebidamente al daño al trabajador fallecido.

Que en cuanto al art. 22 del Código Civil, dispone el elemento sistemático de interpretación legal, en tal sentido el contexto tuitivo del derecho laboral y origen esencialmente contractual determinan que la norma del art. 2330 del Código Civil señalada como la primera norma infringida por aplicación improcedente, sea interpretada de forma tal que no se debe aplicar al caso de marras normas del estatuto de responsabilidad extracontractual teniendo en vista el contexto laboral del caso, y por ende contractual de autos, lo que implica que las demandadas principal y solidarias deben responder de conformidad al estatuto contractual de responsabilidad, en el contexto de los artículos 184, 183 E y 420 a) y f) del Código del Trabajo que dan cuenta de una relación laboral la que necesariamente se origina en un contrato de trabajo, de forma tal que en virtud del art. 69 de la ley 16.744 se deben aplicar las normas de responsabilidad propia de un contrato por incumplimiento de obligaciones propias y directas, cuestión que la recurrida realiza, pero simultáneamente aplica indebidamente el art. 2330 del Código Civil.



Señala que en lo que se refiere a los arts. 1545, 1546, 1547 y 1556 del Código Civil; han sido infringidas al ser aplicadas en conjunto con el art. 2330 del Código Civil, ello por cuanto los arts. 1545, 1546, 1547, 1556 y 1558 del Código Civil nos entregan la esencia del estatuto de responsabilidad contractual, normas entre las que no se comprende una figura de compensación de culpas o de exposición imprudente al daño por la víctima, y en tal sentido al aplicar una norma del estatuto de responsabilidad extracontractual, se ha distorsionado el sistema de responsabilidad contractual en autos, de forma tal que no se han aplicado correctamente las normas de los arts. 1545, 1546, 1547, 1556 y 1558 del Código Civil, por cuanto la institución o figura de la exposición imprudente al daño es ajena al sistema de responsabilidad contractual, razón para desechar tal defensa, por cuanto distorsiona los daños indemnizables, referidos en el art. 1558 del Código Civil que dispone la indemnización de todos los daños directos del incumplimiento contractual y/o previsibles al momento del contrato, siendo la muerte por electrocución un daño directo y previsible en el caso de marras, por cuanto el fallecido era ingeniero civil eléctrico. En tal sentido el art. 1558 del Código Civil no dispone un límite o rebaja de responsabilidad dado por la exposición imprudente de la víctima al daño, es así que la sentenciadora debió tener aquello en consideración y rechazar la excepción de exposición imprudente al daño y seguidamente no se debió rebajar las indemnizaciones concedidas en virtud del art. 2330 del Código Civil por ser una norma ajena a la responsabilidad contractual, aplicable a las relaciones laborales.



Concluye que la infracción de las leyes señaladas ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, de forma tal que se da lugar a la figura de exposición imprudente al daño, reduciendo la cuantía del lucro cesante y daño moral concedidos, en circunstancias de que si se hubieran aplicado correctamente las normas de los arts. 22, 1545, 1546, 1547, 1558 y 2330 del Código Civil; no debiese haber aplicado el art. 2330 del Código Civil dado que sistémicamente no es aplicable a la responsabilidad contractual; o bien en caso de estimar que eventualmente es aplicable el art. 2330 del Código Civil a responsabilidades contractuales, se debe considerar que se ha asentado la culpa de las demandadas y que las circunstancias que provocaron la muerte del trabajador (equipo energizado y desnivel) son circunstancias que son de responsabilidad de las demandadas. Así, en consecuencia, debió rechazar la defensa de exposición imprudente al daño por parte del trabajador fallecido, y no reducir las indemnizaciones concedidas.

Agrega que para el caso que el tribunal considere aplicable el artículo 2330 en sede contractual, se debe considerar que no es efectivo que se haya verificado por parte de la víctima, Sr. Olivares una exposición imprudente al daño, toda vez que no se da el supuesto normativo contenido en el art. señalado, por cuanto el Sr. Olivares no se expuso imprudentemente al daño por electrocución, es así que se debe considerar que las labores realizadas por Francisco Olivares el día del accidente, no se condicen con el permiso de trabajo de ese día identificado con el numero 699 (disponible a folio 162) el que señala como labor: "revisión y puesta en marcha inversores"; permiso que señala claramente que no aplica (N/A) el "Tagout" o "Lock



out", es decir, según dicha probanza documental no es necesario cortar la energía, cuestión que a la postre no era efectiva, pues de serlo es altamente probable que el Sr. Olivares estaría actualmente con vida.

**SEGUNDO:** Que la misma causal de infracción de ley la invoca respecto del efecto relativo de la transacción en relación con los artículos 2461 y 2462 del Código Civil, señalando que en el caso de autos, los demandantes, representan a la víctima como sus causahabientes, en tanto, titular del contrato de trabajo, que lo vincula con la demandada ABB y la contratista, BIOSAR; alegando el incumplimiento de su obligación contractual de cuidado y protección; y que derivó en el accidente del trabajo con resultado muerte; en cambio la transacción invocada es suscrita por los padres de la víctima y su hermana, y tiene por objeto, compensar, ahora, su propio daño, lo que se ha dado por llamar el daño moral por rebote. Consiguiente con lo anterior, la transacción no tiene el alcance de cubrir de forma alguna, la cuestión que se debate en esta sede laboral, puesto que es diferente tanto en la causa y objeto de pedir, como existe ausencia de identidad de partes.

Que los padres del Sr. Olivares y demandantes en estos autos han transigido con EDF, acuerdo que consta a folio 509, en dicha actuación han comparecido los padres de la víctima, pero a título propio y no como causahabientes, siendo las partes distintas, al igual que la causa y el objeto de la transacción, por cuanto se ha transigido por los daños propios de los padres del Sr. Olivares, y no por los daños demandados en autos que corresponden a los daños sufridos por el Sr. Olivares producto de la fatalidad sufrida, en tal sentido no es posible imputar la reparación de dicho acuerdo al caso de marras por cuanto el objeto





sobre el que se ha transigido se refiere al daño personal sufrido por los demandantes por la muerte de su hijo; además que solo se ha transigido por acciones en contra de EDF y no respecto de ABB y Biosar, y en tal contexto su parte se allanó a la excepción de falta de legitimación pasiva respecto de EDF, toda vez, que de la revisión de los antecedentes, las alegaciones realizadas por la demandada eran correctas.

Agrega que se debe considerar que en dicha transacción es manifiesto de su sola lectura que se ha celebrado respecto de EDF en Chile Holding SpA, Edf en Chile SpA, Helio Atacama tres SpA y EDF en Chile Construcción SpA, en donde se han pactado una serie de acuerdos; en lo relevante a este recurso, cabe indicar que se pactó un pago de \$120.000.000.- de pesos a favor de la firma legal que asumió la defensa de los intereses de los demandantes, dicha suma se otorgó para paliar gastos procedentes de acciones derivadas del accidente fatal del caso de marras, por su parte los demandantes han puesto fin a las acciones judiciales respecto de los distintos componentes del grupo EDF y que dan cuenta del reembolso de gastos por 780 horas de trabajo.

Afirma que la norma del artículo 2461 es clara en señalar que la transacción tiene un efecto relativo, en el sentido que solo afecta a aquellas personas que han concurrido a su celebración, no extendiéndose sus efectos a terceros que no han concurrido al acto o que no se han adherido al mismo. Se ha asentado en la sentencia definitiva que quienes transigen son los demandantes y las empresas del grupo EDF; además que los demandados Biosar y ABB no han concurrido, ni adherido a la transacción ante dicha, en tal aspecto, por el efecto relativo de la



transacción consagrado en el art. 2461 del Código Civil, no corresponde que los acuerdos pactados entre los demandantes y EDF les aproveche, por cuanto el objeto de la transacción ha sido la responsabilidad de EDF y no de Biosar y tampoco de ABB.

Agrega que también se ha vulnerado el artículo 2462 por cuanto la transacción dice relación únicamente con las acciones que se deriven del accidente fatal de autos en contra del grupo EDF y no respecto de otras acciones, de forma tal que la sentencia recurrida en su considerando quincuagésimo octavo importa extender indebidamente el efecto de la transacción a objetos no comprendidas en ella como lo son las acciones derivadas del accidente de autos en contra de ABB y Biosar. Omitiendo así aplicar los arts. 2461 y 2462 del Código Civil, cuando era debido aplicarlos.

Concluye que si la sentencia hubiera aplicado las normas de los arts. 2461 y 2462 del Código Civil, debiese haber rechazado en todas sus partes la excepción anómala, dado el efecto relativo de la transacción consagrado en las normas antedichas, lo que implica que solo afecta a las personas que la han celebrado y solo respecto de los objetos transigidos, de lo que se sigue que los \$120.000.000.- de pesos pagados por EDF a los demandantes en virtud de la transacción no deben ser imputados a las indemnizaciones otorgadas en autos.

**TERCERO:** Que de modo subsidiario a la causal anterior, invoca la del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, por haberse dictado la sentencia con infracción manifiesta de las reglas de valoración de la prueba según la sana crítica.

Señala que el vicio se produce, en primer lugar, respecto a la determinación de que procede dar lugar a la



figura de exposición imprudente al daño, lo que redundaría en la reducción del 50% de las indemnizaciones otorgadas por lucro cesante y daño moral debido a que el sentenciador de la instancia ha concluido erróneamente que el trabajador Francisco Olivares se ha expuesto imprudentemente al daño, pues se debe considerar que las labores realizadas por Francisco Olivares el día del accidente, no se condicen con el permiso de trabajo elaborado por Biosar para la aprobación de EDF de ese día identificado con el número 699 el que señala como labor: "revisión y puesta en marcha inversores"; además, dicho permiso señala que no aplica (N/A) el "Tagout" o "Lock out", es decir no es necesario cortar la energía, y este documento fue elaborado por BIOSAR y autorizado por EDF, en circunstancia que la víctima, Sr. Francisco Olivares, había informado a BIOSAR, empresa encargada de la obra, algo muy distinto y que constan en el documento denominado STOP TAKE FIVE (Análisis de Riesgo), incorporado en autos a folio 163.

Agrega que tal actividad informada por la víctima, y que da cuenta del cumplimiento de sus obligaciones en calidad de trabajador, era de conocimiento de ABB como de BIOSAR, seguidamente, BIOSAR debía haber cortado la energía y no dar cuenta de un permiso (699) que no correspondía al real trabajo ejecutado por la víctima, y el no corte de energía por parte de BIOSAR implica una baja en el estándar de seguridad, y deja la posibilidad a que se produzcan accidentes como el ocurrido al Sr. Olivares.

Que también se ha reconocido en la sentencia la existencia de lluvias y un sismo el día de la muerte de Francisco Olivares (considerando decimonoveno). En tales circunstancias no es descabellado pensar que las condiciones climáticas y geológicas hubiesen afectado al



inversor 39 lo que hacía razonable que las jefaturas de ABB y de la mandante Biosar cambiaran el plan de trabajo y modificaran el permiso 699, además del hecho de que no se cortó la energía "aguas arriba"; y según se ha declarado por personal de ABB y por la jefatura del Sr. Olivares, es decir, por el Sr. Cristian Martin, el accidente se podría haber evitado si se desconectaba interruptor de gabinete a/c del inversor y también si se desconectaban protecciones de subestación (según se desprende de registro de audio de audiencia de juicio de 07 de julio de 2022, minuto 2:42:50 a 2:43:18), además señaló que el Sr. Francisco Olivares podía usar los switchs del gabinete de corriente alterna del inversor, pero no podía acceder a los interruptores de la sub estación (según se desprende de registro de audio de audiencia de juicio de 07 de julio de 2022, minuto 2:43:19 a 2:44:00); dicho testimonio confirma que solo de Biosar y EDF podían acceder a la subestación que estaba "aguas Arriba"; además, don Cristian Martin señaló que le consta que personal de Biosar no cortó la energía desde la subestación, pues de haberlo hecho, no se habría producido la descarga de energía que terminó con la vida de Francisco Olivares (se desprende del mismo audio señalado ut supra, minuto 3:08:44 a 3:12:29), y de dicho testimonio se deduce que las demandadas no han tomado todas las medidas de seguridad posibles y debidas para proteger la vida del Sr. Olivares.

Reproduce una serie de antecedentes, y afirma que no sólo la infracción de normas de reglamento e imprudencia temeraria de los demandados es la causa directa e inmediata del accidente, sino que además, esto proviene de una disminución concertada entre todos los demandados del estándar de seguridad de la obra. 66° Los demandados



pretendieron culpar al Sr. Olivares del accidente, arguyendo que se expuso imprudentemente al daño, pero el Sr. Cidón da fe que esos permisos de trabajo, eran los habituales, y que respondían a un cambio de política de seguridad en la obra de EDF, para resolver el retraso en la ejecución de la misma. Esto da cuenta de la mala fe de las organizaciones involucradas, puesto que han guardado un silencio cómplice, sin hacerse cargo de sus conductas que causan daño a otro, y agrega también que se ha reconocido en la sentencia la existencia de lluvias y un sismo el día de la muerte de Francisco Olivares (considerando decimonoveno). En tales circunstancias no es descabellado pensar que las condiciones climáticas y geológicas hubiesen afectado al inversor 39 lo que hacía razonable que las jefaturas de ABB y de la mandante Biosar cambiaran el plan de trabajo y modificaran el permiso 699, además del hecho de que no se cortó la energía "aguas arriba"; concluyendo que las demandadas deben responder de los perjuicios derivados de la muerte del Sr. Olivares pues siendo legalmente debido, en virtud de los arts. 184 y 183-e del Código del Trabajo, ninguna de las demandadas tomó todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de don Francisco Olivares Villena.

Afirma que es contrario a las reglas de la sana crítica, a las máximas de la experiencia y la lógica concluir que el Sr. Olivares se expuso imprudentemente al daño, dados los antecedentes referidos y que de ello devenga la rebaja en el 50% del valor de las indemnizaciones decretadas en autos, pues la víctima no se expuso imprudentemente al daño, sino que el riesgo inherente a su labor fue aumentado, indebidamente, por las demandadas ABB y Biosar, pudiendo reducir razonablemente el



riesgo mediante la desconexión de la subestación. Unido ello a la circunstancia de la información falsa entregada en los permisos de trabajo, especialmente el permiso 699, que indicaba que no era necesario desconectar el inversor 39, para el trabajo a realizar por el Sr. Olivares, cuestión que finalmente derivó en su deceso por electrocución.

Agrega que la sentencia al acoger la defensa de exposición imprudente al daño de la víctima fatal contraría manifiestamente el principio lógico de la no contradicción, en relación a que es contradictorio que existan documentos (especialmente el permiso 699) que den cuenta de que los trabajos a realizar no requerían la desconexión del inversor y que de este haya emanado una descarga eléctrica fatal y que la sentencia lo desconozca o reste valor a dicha circunstancia de falsedad del permiso; y por idénticos motivos también se ha vulnerado el principio lógico de la razón suficiente para determinar la circunstancia antedicha pues se ha determinado documental y testimonialmente que el Sr. Olivares no tenía noción del riesgo dadas las menciones del documento "permiso de trabajo 699" en torno a que no era necesario desenergizar el equipo (mención tag out N/A), en tal sentido las demandadas provocaron en el señor Olivares una falsa sensación de seguridad, circunstancia que es razón suficiente para estimar que la víctima no se expuso imprudentemente al daño. También es razón suficiente para determinar la culpa exclusiva de las demandadas el hecho asentado en juicio de que no se haya desconectado de la subestación la energía del inversor que propinó la descarga fatal.



Que adicionalmente, el hecho de que no se cortara la energía "aguas arriba", cuestión que no se controversió con probanza alguna de ninguna demandada, es razón suficiente para determinar que el trabajador no murió al exponerse imprudentemente al daño, sino que él mismo fue expuesto imprudentemente al daño por las demandadas, de forma tal que el accidente se produjo en virtud de la omisión de las jefaturas y personal de las demandadas en cortar el flujo eléctrico desde la subestación. Lo que es confirmado por el testimonio del Sr. Cidón y sugerido claramente por el testimonio del Sr. Martín. Y además, se vulnera el principio del tercero excluido pues la documental excluye y testimonial referida ut supra igualmente excluye que el Sr. Olivares haya sido imprudente en su trabajo, pues dan antecedentes que la negligencia que ha provocado el daño se da por la omisión de las demandadas en cortar la energía, es decir de quienes tenían el control de la situación, y que conociendo o debiendo conocer los riesgos de la labor no los suprimieron pudiendo hacerlo y siendo debido que lo hiciesen, a lo que se suma la deficiente instalación del inversor con el piso en desnivel. Es así que la falta del sumo cuidado de las demandadas excluye la culpa del difunto señor Olivares en su propio deceso.

Concluye que las infracciones a las reglas de la sana crítica, antes señaladas, han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, de forma que se ha dado lugar a la defensa de exposición imprudente al daño por parte del trabajador accidentado, disminuyendo en un 50% el valor de las indemnizaciones concedidas, en circunstancias de que el riesgo fue aumentando indebidamente por las propias demandadas pues de no vulnerarse las reglas de la sana crítica y los principios de la lógica señalados ut supra la



sentencia debiese haber otorgado las indemnizaciones de daño moral y lucro cesante sin disminución alguna rechazando la defensa de exposición imprudente al daño; pues se hubiese determinado que el accidente fue facilitado por las demandadas mediante su actuar culpable, al omitir todas las demandadas cada una de las medidas necesarias para salvaguardar la vida de su trabajador Francisco Olivares, pues se debió determinar que el permiso 699 claramente señalaba que era seguro trabajar sin desconectar el inversor, cuestión que redundaba en que la información entregada en los permisos era falsa provocando en el fallecido una falsa sensación de seguridad, de forma tal que el accidentado no actuó de forma imprudente de conformidad a la información recibida por parte de su empleador, y ello sumado al hecho evidente de que el inversor se encontraba energizado, puesto que las demandadas no gestionaron el corte de energía desde la subestación, facilitando y provocando por medio de dicha omisión la muerte del trabajador.

**CUARTO:** Que la misma causal invoca el demandante, en relación con el alcance de la transacción celebrada con EDF, afirmando que en el tenor de la misma, se desprende que no se ha hecho extensiva a las demandadas ABB y Biosar, por lo tanto no es procedente rebajar lo pagado por EDF (\$120.000.000.- de pesos) del quantum indemnizatorio, y a este respecto igualmente la sentencia al conceder dicha rebaja ha vulnerado manifiestamente el principio lógico de la identidad, pues en el documento en cuestión (presente a folio 509), si bien contempla la posibilidad u oferta para ABB y Biosar de adherirse al mismo que estaba sujeto a condición y plazo, lo cierto es que no lo hicieron, y por ende no les beneficia; ya que la transacción solo aplica a





las hipótesis señaladas en ella misma, es así que extenderla más allá de sus cláusulas implica otorgarle una identidad y alcance que no tiene.

Que además, infringe el principio de no contradicción por cuanto es contradictorio que se haga extensiva a personas que no consintieron en ella en los términos consignados en referido instrumento.

Agrega que también se ha vulnerado el principio de razón suficiente, por cuanto el hecho de que Biosar y ABB no se hayan adherido a la transacción (pudiendo hacerlo) en los términos indicados, es razón suficiente para que dicho acto no les beneficie; y en tal contexto, la sentencia debió rechazar en todas sus partes la excepción anómala de transacción por cuanto la misma no fue consentida por las partes demandadas Biosar y ABB, en el plazo y condiciones ofertadas, y al resolver imputar \$120.000.000.- a las indemnizaciones decretadas también se ha influido en lo dispositivo del fallo, puesto que no debió darse lugar a la señalada rebaja, pues la transacción no aplica al caso de autos.

**QUINTO:** Que en cuanto al motivo principal de nulidad, referido a infracción de ley del artículo 477 del Código del Trabajo en el sentido en que la funda el recurrente, persigue verificar que la ley haya sido entendida, interpretada y aplicada correctamente al caso concreto, esto es, a los hechos que se han tenido por probados, tal como se han dado por establecidos en la sentencia.

En razón de ello, la impugnación y la subsecuente revisión por parte de este tribunal han de realizarse con estricta sujeción a tales hechos, sin agregar otros y, en particular, sin que pueda prescindirse tampoco de los que fueran determinados en el fallo.



En este orden de ideas, y en lo que interesa, quedaron asentados en la causa y plasmados en la sentencia los siguientes hechos:

1.- El trabajador fallecido don Francisco Olivares Villena fue contratado por la empresa ABB S.A con fecha 04 de enero de 2016. (Considerando Octavo)

2.- El trabajador se obligó a desempeñar el cargo de Technical Service SpecialisrDM. (Considerando Octavo)

3.- El 6 de junio de 2007, el trabajador se encontraba efectuando labores para las que fue contratado de revisión en el inversor CT 39-1 módulo 4 y sufre una descarga eléctrica que provoca su muerte. (Considerando Octavo y Décimo)

4.- El trabajador fallecido era un profesional Ingeniero Civil Eléctrico que a la época en que ocurre el siniestro contaba con capacitaciones en diversas áreas y respecto del cual la empresa había cumplido efectuar las inducciones en materia de seguridad y con entregar la información a que alude el artículo 21 del Decreto Supremo N° 40. (Considerando decimotercero)

5.- El documento incorporado denominado "Procedimiento bloqueo estándar Siete Pasos que salvan Vidas" tiene por objeto establecer medidas preventivas necesarias para el control antes, durante y después del proceso de bloqueo con presencia de energías y que consta de, precisamente siete pasos: 1.- Preparación del trabajo eléctrico. 2.- Identificar claramente la ubicación y los equipos a trabajar. 3.- desconectarse todas las fuentes y asegurar la reconexión. 4.- Comprobar la tensión cero de la instalación a intervenir. 5.- Ejecutar la puesta a tierra del circuito. 6.- proteger contra las partes activas adyacentes y tomar precauciones especiales con conductores energizados



cercanos y emitir un permiso de trabajo. Que, ese documento se refiere también a las reglas a seguir y sostiene que "Antes de ejecutar el estándar Siete Pasos, es requisito realizar los controles operacionales correspondientes, ya que los pasos se consideran como etapas del "Trabajo". Esto es confeccionado el inventario de Riesgos correspondiente, procedimientos de trabajo, Stop take five, diálogos diarios de seguridad obligatorio." (Considerando Decimoquinto).

6.- El trabajador fallecido tenía conocimiento del procedimiento estándar "Siete Pasos que Salvan Vidas". (Considerando Decimosexto).

7.- El accidente se produce porque en la especie el empleador no tomó todas las medidas tendientes a proteger la vida y salud del trabajador fallecido, puesto que del propio informe de investigación que se incorpora en audiencia aparece que las causa del accidente se debe a que en la especie no se respetó el protocolo estándar siete pasos que salvan vidas, además de una supervisión insuficiente. (Considerando Vigésimocuarto y Vigésimosexto).

8.- El accidente que costó la vida a Francisco Olivares se debió a que no cumplió con el protocolo 7 pasos que salvan vidas y se acercó indebidamente a un equipo que no había desenergizado y que debido a que existía un desnivel en la base que soportaba el Inversor en el que había estado trabajando, lo tocó casualmente con el dorso de su mano derecho muriendo por electrocución. (Considerando Cuadragésimo Segundo).

9.- Los demandantes María Cristina Villena Carrillo, Sergio Francisco Olivares Castillo y doña Makarena Francisca Olivares Villena y las empresas EDF en Chile Holding SpA, EDF en Chile SPA, Helio Atacama Tres SpA y EDF



en Chile Construcción SPA celebraron un contrato de transacción con fecha 28 de abril de 2022 en que acuerdan poner término al litigio vigente y precaver uno eventual que pudiera suscitarse con motivo del accidente; pagando el grupo de empresas a los demandantes la suma de \$120.000.000.- (Considerandos quincuagésimo segundo y quincuagésimo quinto)

**SEXTO:** Que conforme con lo anterior, en razón de los hechos establecidos en la sentencia, es posible afirmar que el recurrente no ha respetado los límites fácticos contenidos en el fallo, y que la causal invocada le obliga a aceptar, de manera que solo puede concluirse que la sentenciadora aplicó correctamente las normas que, según la parte demandada, se infringieron en la dictación de la sentencia, como asimismo, correctamente no hizo aplicación de aquellas disposiciones que según el recurrente se habrían omitido.

En efecto, establecido como lo fue en la sentencia que además de haber faltado el empleador a su obligación de proteger la vida y salud de los trabajadores, por no haberse cumplido cabalmente con el protocolo de "siete pasos que salvan vidas", también quedó asentado que el trabajador fallecido tenía cabal conocimiento de tal protocolo además de preparación y calificación para desarrollar la actividad peligrosa que en definitiva le costó la vida; y que actuó de manera imprudente ya que los equipos estaban energizados eléctricamente pues el trabajador no cortó la corriente en forma previa al examen, y procedió además sin usar guantes de seguridad para realizar la acción en tales equipos, y al tocarlos se electrocutó, lo que después le ocasionó la muerte.



De esta manera, existen concausas para el resultado fatal y una de ellas es la imprudencia del trabajador, resultando plenamente aplicable la norma del artículo 2330 del Código Civil, aun cuando la relación laboral tenga un origen contractual, pues el sentido de dicha norma es de carácter general a fin de reducir las indemnizaciones cuando existe un comportamiento imprudente de la víctima. En este sentido, la Excm. Corte Suprema en sentencia de 9 de julio de 2019 en autos Rol 1434-2018 ha establecido la procedencia de aplicación de dicha norma tratándose de accidentes del trabajo, señalando que: *"Décimo: Que, para dichos efectos, se debe recordar que el artículo 2330 del Código Civil dispone que "La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente", regla que, como lo señala tanto la doctrina como la jurisprudencia, se trata de un imperativo que obliga a la judicatura a rebajar la evaluación de los perjuicios en caso que se acredite la exposición al daño en los términos señalados, que procede en el caso que sea consecuencia "tanto en la actividad del demandado como en aquella acción u omisión negligente de la propia víctima, configurando un fenómeno de concausas. En otros términos, el daño es el resultado coetáneo de ambos sujetos, aunque con intensidades diversas. Y es en virtud de esta participación convergente de ambos involucrados en el ilícito, que se procede a rebajar la cuantía del resarcimiento" (así lo plantean los profesores Claudia Bahamondes y Carlos Pizarro en "La exposición de la víctima al daño: desde la culpabilidad a la causalidad", en Revista de Derecho de la P. Universidad Católica de Valparaíso, 2012, 2° semestre, pp. 39-52), contexto en que la culpa de la víctima debe ser sometida a los mismos*



*parámetros que el demandado, pues "el deber de cuidado respecto de los demás también se aplicaría a la víctima para sí misma y respondería, de igual manera, a la necesidad de conducirse con la prudencia que los hombres emplean ordinariamente en sus actos o negocios, tanto en sus acciones como en sus omisiones" (mismo texto citado). De esta manera, tratándose el artículo 2330 del Código Civil, de una norma que de forma categórica impone a la judicatura el deber de considerar la actuación imprudente de la víctima para efectos de atenuar el monto de la indemnización reclamada, y establecida su conducta temeraria y la relación de causalidad material con el daño acreditado, su omisión configura la infracción del precepto señalado, de manera que el recurso de nulidad planteado por dicha vulneración debió ser acogido, y anulada la sentencia de base".*

De esta manera, establecido como lo fue que el accidente que costó la vida al trabajador tuvo como causas tanto el incumplimiento de las normas de protección que la ley le impone al empleador, como también la actividad del mismo trabajador, resulta procedente la aplicación de la norma del artículo 2330 del Código Civil como lo hace acertadamente la sentenciadora a quo, toda vez que dicha norma contemplada para la responsabilidad extracontractual, es posible trasladarla a los accidentes del trabajo ya que los supuestos fácticos son los mismos, procediendo entonces la simple analogía para su aplicación, por lo que se debe rechazar el motivo de nulidad en tal sentido.

Por otra parte, y en razón de lo ya indicado, no se observa tampoco transgresión a las normas de los artículos 22 del Código Civil, pues se han interpretado correctamente las normas aplicables, ni tampoco existe infracción de los



artículos 1545, 1546, 1547, 1556 y 1558 del Código Civil que se refieren a los efectos de las obligaciones.

**SÉPTIMO:** Que en relación con la infracción de ley que invoca el recurrente respecto de los efectos de la transacción, tampoco se advierte dicha infracción, ya que resultó establecido con el instrumento en que se contiene tal contrato, que los demandantes se desistieron de la acción respecto de la demandada Grupo EDF y percibieron de ésta la suma de \$120.000.000.- por concepto de gastos a raíz de las gestiones judiciales que ha significado este proceso, de modo que a tal prestación dineraria no puede dársele otra significación que no sea la de indemnización parcial a raíz del accidente que costó la vida del trabajador fallecido.

En efecto, las partes concurrentes en la transacción y finiquito de 28 de abril de 2022 son los demandantes y la demandada Grupo EDF, la causa de dicho contrato, esto es, el motivo que induce a su celebración, es terminar con el actual litigio respecto de la demandada EDF, y el objeto de la transacción consistente en el pago de \$120.000.000.- además de otras prestaciones no pecuniarias, todo lo cual se identifica con el carácter indemnizatorio que tiene la acción deducida en los presentes autos, de modo que acertadamente en razón del efecto de cosa juzgada que tiene la transacción, la jueza a quo imputó al monto de la indemnización establecida en la sentencia, la suma de \$120.000.000.- que pagó a los demandantes la demandada EDF, a cuyo respecto los actores se desistieron de la demanda.

De esta manera, no se advierte infracción alguna de las normas contenidas en los artículos 2461 y 2462 del Código Civil, sino que por el contrario, han sido correctamente interpretadas y aplicadas.



**OCTAVO:** Que en lo que respecta a la causal de nulidad subsidiaria del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, haber sido dictada la sentencia con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, fundada según el recurrente en que se violentaron las máximas de la experiencia y la lógica, los principios de no contradicción y de razón suficiente, al establecerse por la sentenciadora la exposición imprudente al daño por parte del trabajador; debe tenerse en cuenta que el artículo 456 del Estatuto Laboral dispone al respecto, que *al apreciar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, el tribunal deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime*; sosteniendo además que, *en general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.*

Esta causal de nulidad se produce cuando en la valoración de la prueba efectuada por el sentenciador, se violentan las reglas de la lógica, o las máximas de la experiencia o los conocimientos científicamente afianzados.

Se trata en este caso, además, de un vicio formal que exige que la infracción de las reglas de valoración de la prueba sea "manifiesta", esto es, evidente, ostensible, indudable, que no permita arribar naturalmente a la configuración de los hechos que se dieron por sentados en la sentencia, y con ello, a la decisión adoptada por el sentenciador en cuanto al litigio puesto en la esfera de su conocimiento.





**NOVENO:** Que en el presente caso, la causal invocada no se advierte concurrir, pues, analizada la sentencia de autos se advierte que la sentenciadora a quo hace un detallado análisis de la prueba rendida, y razona abundantemente sobre la exposición imprudente al daño por parte del trabajador, como se aprecia en los considerandos decimotercero, decimoquinto, decimosexto, cuadragésimo primero y siguientes; y en definitiva los hechos establecidos por el juez a quo en la sentencia y sobre los cuales sustenta su decisión de exposición imprudente al peligro resultan coherentes, sin que se advierta de modo alguno las contradicciones que denuncia el recurrente, ni la falta de fundamento o razón suficiente, ni una infracción a las máximas de la experiencia, o que el sentenciador haya apreciado incorrectamente la prueba que se le aportó, lo que queda se advierte especialmente en el razonamiento contenido en el considerando quincuagésimo segundo de la sentencia, al señalar la jueza a quo que: *"Que, se ha acreditado que el accidente que costó la vida a Francisco Olivares se debió a que no cumplió con el protocolo 7 pasos que salvan vidas y se acercó indebidamente a un equipo que no había desenergizado y que debido a que existía un desnivel en la base que soportaba en Inversor en el que había estado trabajando, lo tocó casualmente con el dorso de su mano derecho muriendo por electrocución"*. Y luego, en el considerando cuadragésimo tercero, la sentenciadora explica su determinación en el sentido impugnado por el recurrente basándose en las evidencias aportadas al juicio, y señalando que: *"Que, con ello, es posible establecer que el trabajador Francisco Olivares se expuso imprudentemente al daño, y no existe algún otro medios de prueba que lo desvirtúe, ello porque*



*las declaraciones e informes generados por el señor Jesús Cidón no generan convicción en esta sentenciadora, toda vez que es quien se acerca a la familia del trabajador fallecido y los contacta con el abogado que les representa en esta causa, ello lo señala en audiencia de juicio la hermana y el primo del trabajador fallecido quienes declaran como testigos, de ahí que se puede presumir que existe un interés de Jesús Cidón en las resultas de esta causa; que por otro lado, el informe de accidente evacuado por Diego García Bozo, tampoco permite desvirtuar el análisis efectuado con el resto de los medios de prueba dado que doña Makarena Francisca Olivares Villena, manifiesta que Diego García fue amigo de su hermano - Francisco Olivares Villena- y les ayudó mucho. Que, de esta manera necesariamente estas circunstancias deben ser considerada al momento de establecer el quantum indemnizatorio”.*

De esta manera, conforme al raciocinio de la sentenciadora, quien analiza y valora toda la prueba rendida pertinente, concluyendo que el trabajador fallecido se expuso de manera imprudente al peligro latente en su actividad, en nada se aparta del análisis lógico que supone el empleo de las reglas de la sana crítica, para decidir de la forma en que lo hace, y más bien, el presunto defecto que le atribuye la parte demandada radica únicamente en no compartir los hechos y conclusiones que estableció la sentenciadora, pero ello no puede fundar la causal de nulidad en estudio, la cual necesariamente debe rechazarse.

**DÉCIMO:** Que del mismo modo procede rechazar el motivo de nulidad en estudio respecto de la transacción, pues el examen que realizó la magistrada a quo es eminentemente jurídico, resultando acertada la imputación del monto



pagado en virtud de tal contrato a la indemnización que se establece en la sentencia, sin que exista infracción a las normas sobre apreciación de la prueba conforme a la sana crítica, remitiéndonos al respecto a lo ya indicado en el considerando séptimo del presente fallo.

**II.- En cuanto al recurso de nulidad de la demandada BIOSAR CHILE SpA.**

**UNDÉCIMO:** Que la demandada Biosar Chile SpA invoca como causal de nulidad de la sentencia, la contemplada en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, por infracción manifiesta a las reglas de la sana crítica que llevaron al juzgador a concluir la procedencia de indemnizaciones por daño moral y por lucro cesante en circunstancias que no proceden. Y en subsidio y únicamente respecto del daño moral, alega que la condena dineraria es arbitraria e injustificada y debiese rebajarse en un monto que se ajuste a la práctica judicial sobre esta materia, solicitando que se anule la sentencia y se dicte una de reemplazo, en aquella parte que determina que, no obstante, *"el señor Francisco Olivares Villena quedó inconsciente luego del accidente, sufrió igualmente dolor y que por consiguiente debe ser indemnizado"*, para luego establecer el daño moral en la exorbitante suma de \$800.000.000, por considerar que tal suma abarcaría una infinidad de circunstancias propias de la vida. Y, también para que la anule en aquella parte que otorga una indemnización por lucro cesante aun cuando considera que esta indemnización tiene por objeto compensar lo que la víctima haya dejado de ganar o percibir por efecto del daño sufrido.

**DUODÉCIMO:** Que desarrollando la causal en estudio en cuanto se ataca el establecimiento de daño moral, refiere aspectos doctrinarios y jurisprudenciales que fijan el



concepto de las reglas de la sana crítica, y en cuanto a la improcedencia de la condena por dicho daño, afirma que si bien en nuestro sistema jurídico laboral el juez valorará la prueba conforme a las normas de la sana crítica, al momento de fijar prudencialmente el daño moral no tiene facultades absolutas para ello y no puede recurrir a sus convicciones íntimas, siempre el juez en el análisis prudencial del daño debe regirse en términos absolutos por los principios de la sana crítica, y al fijar la cuantía del daño moral el tribunal no se apegó al artículo 456 de forma tal que se evidencia una vulneración a las reglas de la sana crítica.

Afirma que se infringe el principio de no contradicción, y la primera premisa correcta del silogismo errado está contenida en el considerando trigésimo quinto de la sentencia, al establecer que el señor Olivares Villena sobrevivió a la descarga eléctrica por lo menos media hora y que estaba inconsciente. Respecto al estado de inconciencia, y la prueba rendida de esto, un perito eléctrico interrogado por los intervinientes de autos en la audiencia de juicio ilustró al tribunal sobre la ciencia y particularmente las leyes físicas aplicables cuyo entendimiento era necesario para establecer las circunstancias que rodearon el lamentable accidente. Afirmó que atendido que una persona muere de forma inmediata con una descarga de aproximadamente 60 voltios, cuya energía pasa por todos los músculos, órganos y tejidos y detiene el corazón, puede variar un poco según el peso y condiciones físicas de este considerando que el señor Olivares Villena recibió una descarga de 690 voltios (lo que equivale 10 veces más de la energía que produce la muerte).

Concluye que la inconciencia, es un estado de



desvinculación con la realidad que por tanto no se puede presumir en ninguna circunstancia que exista un sufrimiento, ni que quien esté en ese estado haya podido darse cuenta de sí mismo, de manera que no es posible establecer que una persona inconsciente pueda sentir dolor alguno.

Señala que la segunda premisa contradictoria con la primera, y por tanto errada conforme a lo ya expuesto, está esbozada en el mismo considerando trigésimo cuarto, y es que no obstante lo anterior, el sentenciador concluyó que si bien el señor Olivares Villena estaba inconsciente sí sufrió dolor y que consideró debe ser indemnizado; en circunstancias que una persona inconsciente no puede sufrir, no tiene la capacidad de sufrir, en tanto esta capacidad es única y exclusiva de las personas conscientes y es ahí donde se evidencia que es esta segunda premisa la errada, quien esta inconsciente no puede estar consciente del dolor a la vez. Es más, el juez laboral vincula el daño moral con el sentimiento del ser humano, que requiere que quien lo sufra se encuentre con vida, sino no existe sufrimiento, pues bien ya desarrollamos que una conciencia del dolor no ocurre en estado inconsciente. Entonces, el sentenciador haciendo caso omiso al estado de inconsciencia establecido como hecho en la causa, concluye que el señor Olivares Villenas sufrió daño y que debe ser indemnizado; y al establecer el monto del daño moral en la exacerbada suma de \$800.000.000, nuevamente incurre en una contradicción, y es que, en el considerando trigésimo octavo, establece que para fijar esa suma debe abarcar una infinidad de circunstancias propias de la vida, no obstante que en un principio se refirió a que debía ser indemnizado era únicamente el dolor sufrido y no una infinidad de



circunstancias que no se logran inferir de lo expuesto.

**DECIMOTERCERO:** Que de manera subsidiaria, pero dentro de la misma causal y para el caso de estimarse que debe indemnizarse el daño moral, afirma que la suma de \$800.000.000.- es absoluta e innegablemente exacerbada, exorbitante y escapa a toda la práctica judicial en esta materia. Es pues en este punto en el que se configura esta causal invocada, para fijar prudencialmente el quantum del daño el sentenciador no tiene facultades absolutas para ello y necesariamente debe regirse por las máximas de la experiencia, que es lo que la jurisprudencia ha resuelto en casos similares; y si bien cabe recalcar que son los jueces a quienes se les ha entregado fijar el monto de la indemnización por daño moral mediante una apreciación prudencial, en la práctica los jueces deben y tienen límites en su apreciación para la fijación del referido monto y es que la reparación en todo momento debe ser justa.

Señala que la doctrina ha señalado que la indemnización por daño moral no podrá ser compensatoria atendida la naturaleza del dolor sufrido y siempre será meramente satisfactiva, lo que significa que pretende ser una ayuda o auxilio que le permite a la víctima atenuar el daño, ahora bien, en todo momento la reparación debe ser justa. Los límites que tendrán los jueces en su apreciación prudencial para fijar el monto por la indemnización de daño moral, son una manifestación del principio de reparación integral, dicho principio ha sido enunciado por la doctrina como aquel *"cuyo contenido impone que la medida de la reparación corresponda con la entidad del daño, dejando fuera cualquiera otra consideración"*

Cita jurisprudencia y agrega que si bien al determinar



la cuantía del daño moral se utilizan parámetros algo difusos, ha sido la doctrina y la jurisprudencia, las que han configurado estándares de proporcionalidad e imparcialidad para la actividad racional del juez, en definitiva, el daño causado debe estar únicamente ligado a la extensión de este y se apegue a estándares objetivos. Los parámetros objetivos para la fijación del monto del daño moral han sido especificados por la jurisprudencia como, la naturaleza del daño, la gravedad de la lesión causada, el dolor o padecimiento sufrido, la extensión del daño y las posibilidades de recuperación de la víctima, y la sentencia al fijar la indemnización del daño moral en la elevada suma de \$800.000.000.- no respeta ninguno de dichos parámetros.

Agrega que las consideraciones que tuvo a la vista el juez dan cuenta que no se ciñó al imperativo de valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica y donde se infringió manifiestamente las máximas de la experiencia respecto al daño moral, están contenidas en los considerandos trigésimo quinto y trigésimo sexto, en los que primero resumió las dos posturas doctrinales sobre la función del daño moral y luego sugirió que la evaluación y determinación de este quantum indemnizatorio quedaría sujeto a su prudencia y equidad, y reproduce los considerandos trigésimo quinto y trigésimo sexto; pero en el considerando trigésimo octavo el sentenciador, al decir que abarca una infinidad de situaciones de la vida no realiza una apreciación prudencial de la evaluación del daño, por el contrario, no realiza apreciación alguna y en esto evidencia que únicamente puede haberse remitido a su íntima convicción para terminar por alejarse de todo parámetro o monto visto en la práctica judicial, fijándolo



en la manifiestamente exorbitante suma de \$800.000.000.- Lo anterior da cuenta que el juez no tuvo ni la mínima consideración objetiva para fijar la cuantía del daño moral, explicándose así el elevado monto fijado, ajeno a toda proporcionalidad, absolutamente arbitrario, al alejarse a tales parámetros, incurre indefectiblemente en consideraciones y apreciaciones subjetivas para arribar a lo que el sentenciador le haya apetecido condenar.

Dice que la sana crítica en casos complejos y difíciles obliga al sentenciador a recurrir a más allá de su prudencia, más allá de su convicción personal, ponderación o prudencia, debe necesariamente recurrir a la experiencia judicial para efectos de amparar la solución de la controversia, a lo que la práctica judicial ha entendido como razonable y justo. De una somera lectura de condenas por daño moral en nuestra jurisprudencia, en materia de accidentes fatales, en sede laboral, en que causahabientes reclaman perjuicios sufridos por el trabajador fallecido(a), como es el caso que nos ocupa, el monto fijado en este caso por, daño moral, supera absolutamente todo lo considerado normal o razonable, exponiendo diversos casos de indemnizaciones en la justicia nacional.

Afirma que si de criterios jurisprudenciales se trata, resulta muy importante tener a la vista el importante esfuerzo de la Corte Suprema y la Universidad de Concepción en orden a hacer posible la elaboración y difusión a la comunidad jurídica de tablas o baremos estadísticos de montos indemnizatorios extraídos de las sentencias dictadas por los tribunales de justicia chilenos. Si bien este estudio estadístico no tiene carácter vinculante y según declara el Poder Judicial, es meramente referencial, el mismo resulta relevante y cada día más gravitante en las





decisiones de los tribunales y las partes en las decisiones.

**DECIMOCUARTO:** Que dentro de la misma causal de nulidad, alega la improcedencia de la indemnización por lucro cesante, afirmando que la obligación de indemnizarlo no debiera nacer al derecho con la muerte del trabajador, de lo contrario se confunde el hecho de la muerte con la certeza de la ocurrencia del daño patrimonial demandado, y el derecho a ser indemnizado por el lucro cesante y la correspondiente obligación de indemnizar por este concepto carece en la especie de un elemento esencial para su nacimiento, a saber, que el titular del derecho se encuentre vivo al momento del nacimiento de dicho derecho, o que la obligación de indemnizar nazca con un sujeto activo o acreedor, pues ello se vincula con la finalidad de la indemnización del lucro cesante, que no es más que reparar del daño causado y dejar a la víctima indemne, de manera que, en este caso, de otorgarse una indemnización por este concepto no conlleva a lo anterior, no repara el patrimonio de la víctima sino de terceros.

Afirma que se infringe el principio de razón suficiente, y en la conclusión a que arriba el juez en el considerando Trigésimo Noveno se produce la infracción a las normas de la sana crítica pues esta conclusión carece de una razón suficiente que la justifique, ya que, no obstante razonar sobre la finalidad del lucro cesante, debiendo concluir que conforme a la misma no es procedente en el caso ya que no repara el patrimonio de la víctima, sin embargo, igualmente otorga una indemnización por este concepto, de modo que no pudiendo tener el lucro cesante la finalidad y objeto que, incluso el mismo sentenciador reconoce debe concurrir para su procedencia, no encuentra



fundamento el mismo si no es posible que se configure este objeto en el caso de autos y por tanto debe anularse la demandada en aquella parte que lo otorga.

**DECIMOQUINTO:** Que en subsidio de la causal de nulidad anterior, invoca la contemplada en el artículo 478 letra e) en relación con el artículo 459 N° 4 del Código del Trabajo, por haberse omitido en la sentencia el análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esta estimación.

Señala al respecto que la sentencia en los considerandos cuadragésimo primero al cuadragésimo tercero, incluido este último, manifiesta una evidente desconexión entre la prueba rendida y los hechos acreditados, omite todo análisis a prueba rendida, lo que implica finalmente efectuar razonamientos erróneos. En ese sentido, las demandadas ABB y Biosar incorporaron amplia prueba documental respecto a la formación profesional de don Francisco Olivares Villena, a sus conocimientos técnicos específicos y avanzados en las labores que estaba desarrollando, así como a su destacada experiencia laboral en Plantas Fotovoltaicas y a su absoluto manejo y conocimiento de la operación y trabajo específico que debía efectuar en la Planta Fotovoltaica Bolero y que estaba realizando al momento de ocurrir el accidente; y asimismo, también incorporaron prueba de las numerosas capacitaciones y cursos en materia de seguridad ocupacional. En lo particular, fue cabalmente capacitado en el manejo seguro y en el detalle técnico de la operación del tipo de inversores que intervino el día 6 de junio de 2017.

Agrega que nada dice el sentenciador sobre su experiencia y especialidad laboral del trabajador fallecido al tratar la exposición imprudente al daño, no obstante ser



la principal alegación de las demandadas de que el señor Olivares habiendo sido un profesional que capacitado y que innegablemente sabía que para realizar la sencilla y primordial tarea de intervenir un inversor debía desenergizarlo y aplicar los procedimientos de seguridad antes de intervenirlo manualmente - tal como la sentencia establece - y que también tocó causalmente el inversor energizado. Es más, omite totalmente cualquier consideración a su experiencia y especialidad laboral, sin darle la relevancia a que, alguien con tal formación no desenergice un equipo de las características que intervino antes de operarlo, o que no cumpla con el protocolo conocido, lo anterior no es simplemente casual como malamente concluye el sentenciador. Entonces, debemos destacar que aun cuando se rindió prueba de la experiencia y especialidad laboral nada trata la sentencia de esta y al incurrir en esa omisión se manifiesta el vicio alegado, de haberse considerado tales probanzas, el sentenciador habría acogido la alegación de culpa exclusiva del trabajador o al menos habría considerado esto al momento de establecer la rebaja al quantum indemnizatorio por exposición imprudente al daño que sí dio por establecido, a mucho más de la mitad de la indemnización otorgada.

Afirma que las circunstancias que tuvo en consideración el sentenciador para establecer la exposición imprudente al daño y fijar a la mitad la rebaja al quantum de las indemnizaciones no tuvieron en consideración lo anterior, ni el mínimo análisis o referencia a dicha prueba rendida tal y como reconoce el mismo juez laboral en el considerando cuadragésimo tercero que reproduce, y a mayor abundamiento, lo señalado sobre la experiencia y especialidad laboral del señor Olivares en sus funciones



debe tenerse presente respecto a la diligencia exigible en la ejecución de sus labores en las que había sido capacitado y conocía a cabalidad por sus reconocidos conocimientos técnicos y científicos aplicables a las tareas que estaba realizando.

Concluye que lo anterior tiene relevancia en el caso de autos y es que conforme se demandó la indemnización de perjuicios derivada de un accidente del trabajo, invocándose el régimen de responsabilidad contractual, debió haberse analizado toda la prueba rendida más aún si permitían llegar a lo alegado por esta parte como eximente de responsabilidad, a saber la culpa exclusiva del trabajador o al menos ponderar el peso de la prueba rendida a la hora de determinar la rebaja por exposición imprudente al daño.

Afirma que la sentencia omite del todo considerar el valor probatorio de la prueba incorporada pertinentes para acreditar alegaciones de culpa exclusiva del trabajador o para realizar una rebaja considerablemente mayor al monto de las indemnizaciones otorgadas, respecto a la exposición imprudente al riesgo establecido. El sentenciador no dedicó línea alguna referida al análisis de ciertas pruebas ofrecidas las cuales resultaban del todo fundamentales para comprender los hechos y efectuar un acertado análisis del caso, en lo particular, el sentenciador ni tiene en cuenta el contenido de estas. Lo anterior no puede dejarse pasar con liviandad, y es que se omitió todo análisis de estos antecedentes en la sentencia, ni siquiera las revisó, de haberlo hechos necesaria y evidentemente sus conclusiones hubieran sido absolutamente distintas, principalmente en cuanto concluye lo ya transcrito en los considerandos cuadragésimo segundo y cuadragésimo tercero, y es que como



bien dijimos debió haber configurado la culpa exclusiva del trabajador o haber aplicado una rebaja considerablemente mayor al monto de las indemnizaciones por la influencia que tuvo en los hechos la enorme exposición imprudente al daño.

Concluye que el vicio denunciado influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues un correcto análisis de toda la prueba rendida, sin haber omitido las probanzas respecto a experiencia y especialidad laboral del trabajador fallecido, habría concluido que se configuró la culpa exclusiva del trabajador o debió haber aplicado una rebaja considerablemente mayor al monto de las indemnizaciones otorgadas, por la influencia y determinación que tuvo en el lamentable acaecimiento de los hechos la enorme exposición imprudente al riesgo del trabajador.

**DECIMOSEXTO:** Que en cuanto a la causal del artículo 478 letra b), ya dijimos a propósito del arbitrio de la parte demandante, que esta causal de nulidad se produce cuando en la valoración de la prueba se violentan las reglas de la lógica, o las máximas de la experiencia o los conocimientos científicamente afianzados, además que se trata de un vicio formal que exige que la infracción de las reglas de valoración de la prueba sea “manifiesta”, esto es, evidente, ostensible, indudable, lo que no permita arribar naturalmente a la configuración de los hechos que se dieron por sentados en la sentencia, y con ello, a la decisión adoptada.

Conforme con lo anterior y en relación con el primer aspecto del motivo de nulidad, en cuanto pretende el recurrente que se declare la improcedencia de la condena por daño moral, por estimar que el trabajador fallecido no sobrevivió a la descarga que sufrió en el accidente y por



ello no sufrió daño moral, lo cierto es que del análisis de la sentencia no se advierte que la jueza a quo haya vulnerado de modo manifiesto las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba, sino que en contrario de lo que señala el recurrente, la sentencia impugnada cumple con la exigencia de fundamentación, pues de su examen, queda evidenciado que en el fallo se analiza toda la prueba rendida, los hechos estimados probados y el razonamiento que conduce a esa estimación, no advirtiéndose contradicciones, pues las que pretende advertir el recurrente dicen relación con el valor probatorio que la jueza pudo dar al informe de peritos contrastado con otros antecedentes del juicio, pero tal apreciación corresponde efectuarla al juez, quien no infringe las reglas de la sana crítica si da razones lógicas para su decisión, como acontece en el fallo recurrido según se aprecia del considerando trigésimo cuarto al concluir la sentenciadora: *"Que, conforme la prueba documental incorporada en autos consistente en declaración de Kotsilitis Ioannis, declaración de Joaquín Anatibia, certificado de defunción del trabajador Francisco Olivares Villena, declaración de don Jaime Eduardo Vargas Salgado, permite establecer que el trabajador sufrió el accidente entre las 17:30 y las 17:50, puesto que el señor Ioannis señala en su declaración que a esa hora escucha el grito de Francisco Olivares y lo socorre, que si bien están inconsciente, respiraba, lo mismo señala Joaquín Anatibia, quien sostiene en su declaración que Francisco respiraba "raro" como un ronquido; que el paramédico llegó al lugar a las 17:55, sostiene que el señor Olivares estaba vivo, puesto que en su declaración indica que procedió a evaluarlo, revisando pulso y frecuencia respiratoria y señala que los*



*valores eran frecuencia cardiaca a nivel carotideo en 56 por minuto, frecuencia respiratoria en 19 por minuto y constató estado quejumbroso del paciente, con respuesta al estímulo por dolor, con una saturación de 92%, ello permite establecer que Francisco Olivares Villena, efectivamente estaba con vida al momento de la revisión, que la variación de los signos de los signos en deceso se produce a las 18:10, durante el trayecto hasta la posta de Baquedano; que si bien, el informe de autopsia N°80/2017 concluye que "las alteraciones encontradas son vitales, necesariamente mortales, compatibles con el antecedente de electrocución", se puede concluir que el trabajador Olivares Villena sobrevivió a la descarga eléctrica por a lo menos media hora, y que si bien estaba inconsciente sufrió dolor que debe ser indemnizado".*

Como se ve, independientemente del lapso de tiempo de sobrevivencia del trabajador fallecido que se haya determinado en la sentencia, el análisis lógico de la prueba hace concluir a la jueza a quo que el trabajador no falleció de manera simultánea con la descarga eléctrica como lo pretende establecer el recurrente, sino que sobrevivió a la misma como lo señaló el testigo presencial, además de otro que llegó después y advirtió que estaba con vida, y los dichos del paramédico que le prestó atención.

Así las cosas, es acertado sostener que por no tratarse de una muerte instantánea el trabajador fallecido tuvo en su patrimonio la acción indemnizatoria para reclamar daño moral, el que ahora invocan sus herederos con justo título; por lo que el fundamento del recurrente en este sentido carece de asidero y más bien, lo desarrolla por no estar de acuerdo con las conclusiones a que se arriba en la sentencia, pero ello no es causal de nulidad,



por lo que en este aspecto debe rechazarse el motivo de nulidad en análisis.

**DECIMOSÉPTIMO:** Que como se ha indicado, en lo que respecta a establecer el sentenciador la existencia de daño moral, no existe infracción alguna a las reglas sobre apreciación de la prueba conforme a la sana crítica, como ya se dijo; pero la situación es distinta, y puede afirmarse que se infringen las máximas de la experiencia, cuando se regula el monto del daño moral de manera prudencial, sin concordancia entre el monto fijado y la práctica judicial, de acuerdo a los estudios efectuados tanto a nivel judicial como académico en relación a la determinación del daño moral, mediante un sistema comparativo de las sentencias dictadas por los diversos tribunales del país, y que conforman el denominado baremo judicial, que en el presente caso no es considerado por la sentenciadora a quo, y al no hacerlo omite un parámetro objetivo tendiente a evitar arbitrariedades mediante indemnizaciones excesivas, que conducen a una desigualdad indebida entre un caso y otro.

En estas condiciones y, atendido que el sentenciador evitó en la determinación del monto indemnizable por daño moral, recurrir a parámetros objetivos, apartándose de la práctica judicial común para establecer la íntegra reparación de dicho daño, se concluye por esta Corte que en este aspecto de la sentencia, al regular el monto del daño moral a indemnizar, sí se ha incurrido en la causal de nulidad en estudio, pues se ha apartado el juzgador a quo de las máximas de la experiencia al no considerar las indemnizaciones fijadas para casos similares, por lo que ha existido una infracción en la aplicación de las normas de valoración de la prueba conforme a la sana crítica en la determinación del monto a indemnizar por concepto de daño moral.





En este orden de ideas, la Excm. Corte Suprema ha declarado que establecida la procedencia de indemnización por daño moral, corresponde regular su monto, para lo cual debe tenerse presente, *"en consideración que la suma fijada por el tribunal del grado escapa a los rangos en que se mueve el baremo por daño moral por accidente del trabajo que se extrae del sitio <http://baremo.pjud.cl/BAREMOWEB>, resultado de un estudio encargado por esta Corte a la Universidad de Concepción, que consolidando los extremos en que la jurisprudencia se desplaza en materia de regulación de indemnizaciones por daño moral, configura un sistema que, a juicio de esta Corte, otorga elementos que le permiten realizar dicho ejercicio ponderatorio, dentro de márgenes que logran garantizar ciertos criterios de igualdad procesal y predictibilidad jurídica, propios de la exigencia que un estado de derecho le formula a los órganos jurisdiccionales"*. (Corte Suprema, sentencia de 09 de julio de 2019, Rol 1434-2018, unificación de jurisprudencia).

**DECIMOCTAVO:** Que en cuanto a la vulneración de las reglas de la sana crítica por haberse establecido la procedencia de lucro cesante, debe tenerse en cuenta que dicho perjuicio tiene carácter material, sin que se discuta su transmisión a los herederos, en la medida que se acredite de manera efectiva que el causante sufrió efectivamente a raíz del accidente, la pérdida de ganancias legítimas que, de no mediar el hecho dañoso, habría podido obtener.

En este orden de ideas debe tenerse en cuenta que el lucro cesante que reclaman los actores es aquella utilidad que su hijo fallecido dejó de percibir, y que estiman "en



la suma de \$1.132.390.920 y que se obtiene de sumar todos sus ingresos con una expectativa real de ser obtenidos en el tiempo de su vida laboral” según se indica en la demanda; señalando que el lucro cesante es la diferencia entre el patrimonio actual de la víctima y el que tendría por medio del aumento que no se ha realizado por causa directa del accidente de autos.

De esta manera, los actores no reclaman el perjuicio que a ellos les significó la muerte de su hijo por los auxilios que éste les prestaba, sino que reclaman la pérdida de utilidades futuras que su hijo fallecido experimentó con su propia muerte.

**DECIMONOVENO:** Que la sentenciadora a quo, para determinar la procedencia de la indemnización por lucro cesante en este caso, razona en los motivos trigésimo noveno y cuadragésimo del fallo recurrido, señalando en síntesis, que el trabajador de 28 años, con un título de ingeniero civil eléctrico, se encontraba trabajando a través de un contrato indefinido, sin que existan elementos que permitan establecer que no seguiría trabajando en el futuro para su actual empleador o para otro, pues se trataba de un trabajador altamente cualificado; y que con las tres últimas liquidaciones se puede establecer que percibía una remuneración líquida de \$1.765.627.- y que restaban 37 años para alcanzar la edad de jubilación, por lo que la pérdida de ganancia asciende a \$784.000.000.-,

**VIGÉSIMO:** Que como se ve, para establecer la existencia de lucro cesante la sentenciadora se plantea la hipótesis de vida del trabajador fallecido, y efectúa una operación matemática consistente en multiplicar la última remuneración líquida por los meses que le restaban al trabajador si hubiera alcanzado su edad de jubilación.



Lo cierto es que la determinación del lucro cesante y su valuación en la forma indicada carece de razón suficiente, pues la jueza no toma en consideración ni analiza la muerte del trabajador, como un elemento fundamental para restarle certeza al daño por lucro cesante, apartándose en consecuencia de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, y estableciendo un daño por lucro cesante que en la forma pedida por los actores resulta imposible.

En efecto y tal como ya se dijo, los actores reclaman el daño por lucro cesante que su hijo fallecido sufrió invocando para ello la calidad de herederos, pero con la muerte del trabajador en el accidente, se desvanece absolutamente el requisito de certeza que el daño requiere, ya que las pretendidas pérdidas de ganancias legítimas que el trabajador fallecido pudo haber obtenido, se transforman en imposibles en razón de la certeza de su muerte.

La muerte del trabajador transforma en imposible toda posibilidad de generación de pérdidas, como también de perder cualquier chance, ya que esas probabilidades se desvanecen con la muerte, y en consecuencia el lucro cesante que reclaman los actores, como un perjuicio sufrido por su hijo fallecido pierde todo sustento, pues ninguna expectativa de orden económico ingresó a su patrimonio y que pudiera transmitir a sus herederos.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la acción incoada por los demandantes es de índole contractual, mediante la cual se busca la indemnización del lucro cesante del causante, el cual es reclamado en calidad de herederos del trabajador fallecido, y considerando que con su muerte el trabajador perdió cualquier posibilidad de sufrir alguna pérdida de ganancia futura o chance, la



sentencia recurrida al establecer la existencia de lucro cesante y proceder a su valuación, incurre en la causal de nulidad invocada por la demandada BIOSAR CHILE SpA, por haberse apartado la sentenciadora de las reglas de la sana crítica, careciendo en este aspecto de razón suficiente su decisión.

**VIGESIMOPRIMERO:** Que en lo que respecta a la causal del artículo 478 letra e) en relación con el artículo 459 N° 4 del Código del Trabajo, por haberse omitido en la sentencia el análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esta estimación; en razón de haberse invocado en subsidio de la anterior, la que será acogida, se omitirá su análisis y pronunciamiento.

**III.- En cuanto al recurso de nulidad de la demandada ASEA BROWN BOVERI S.A. ("ABB S.A.")**

**VIGESIMOSEGUNDO:** Que la demandada ABB S.A. invoca en primer lugar la causal de nulidad de la sentencia la contemplada en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, por infracción manifiesta a las reglas de la sana crítica, en cuanto a la determinación del monto a indemnizar por concepto de daño moral, refiriendo aspectos doctrinarios sobre la causal y jurisprudencia, afirmando que el cuántum o monto que la sentencia establece para indemnizar el daño moral es excesivamente gravoso, sin que exista ningún punto de comparación en la experiencia judicial y jurisprudencia atendidos los hechos asentados por la sentenciadora. En efecto, el tribunal realiza una valoración errada al momento de determinar el monto a indemnizar por concepto de daño moral, en particular la sentenciadora infringe las máximas de experiencia contenidas en la experiencia judicial y en la



jurisprudencia nacional de los tribunales. La sentenciadora no se ciñe a las reglas que le impone la ley a la hora de valorar y cuantificar el daño moral en la sentencia de marras, pues no toma en consideración la experiencia judicial y lo que la práctica judicial define como justo y razonable. Se debe considerar que la valoración de la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en este caso, la máxima de experiencia antes señalada constituye un imperativo para la sentenciadora, imperativo que no puede ser desoído sin incurrir en un vicio de nulidad como el que se denuncia en autos. En este sentido, la sentencia es nula porque al valorar el daño moral y cuantificarlo no aplica la máxima de experiencia que le impone la norma legal, sino que realiza una cuantificación exagerada, fuera de todo parámetro y ajena a la experiencia judicial.

Agrega que resulta especialmente relevante que a partir del año 2012 es un hecho público y notorio que la Excelentísima Corte Suprema ha venido trabajando con la Universidad de Concepción en la confección de una serie de instrumentos que permitan difundir y poner en conocimiento de la comunidad jurídica baremos estadísticos de montos indemnizatorios extraídos de las sentencias dictadas por los tribunales de justicia chilenos, elaborándose el "Baremo Jurisprudencial Estadístico sobre Indemnización de Daño Moral por Lesiones derivadas de Infortunios Laborales" (contenido en la página web <https://baremo.pjud.cl/BAREMOWEB/>). Este baremo resulta especialmente relevante para poder comparar ante situaciones similares cual ha sido el criterio indemnizatorio que han adoptado nuestros tribunales de justicia, indicando diversas indemnizaciones fijadas por



los tribunales nacionales, afirmando que es posible determinar que el promedio nacional sobre indemnización de daño moral por muerte en las Cortes de Apelaciones de nuestro país asciende a 3.737 UF, que, a la época del accidente, esto es, al día 6 de junio de 2017, equivalía a la suma de \$99.557.417.-, por lo que el monto señalado por la sentenciadora para indemnizar el daño moral en autos es a todas luces injustificado, incoherente con la práctica judicial y la jurisprudencia, pues excesivo y exorbitante, y deviene en lucrativo, perdiendo su carácter resarcitorio.

Concluye que la sentenciadora debió de haber aplicado las máximas de experiencia en materia judicial y haber ajustado el monto a indemnizar por concepto de daño moral a los valores y sumas establecidos en la práctica judicial y recogida en la jurisprudencia y en el Baremo de la Excelentísima Corte Suprema. En este sentido, y considerando los hechos de la causa y la concordancia de los demás medios probatorios, la sentenciadora debió ajustar el quantum indemnizatorio por concepto de daño moral al promedio establecido en el Baremo.

**VIGESIMOTERCERO:** Que la misma causal deduce de manera simultánea, referida a la determinación del monto a indemnizar por concepto de lucro cesante, señalando que el quantum o monto que la sentencia establece para indemnizar el lucro cesante es excesivamente gravoso, pues no considera los gastos por coste de vida. En efecto, la sentencia vulnera la máxima de experiencia que indica que toda remuneración implica un costo para producirla, un costo para obtenerla. Dicho coste se denomina en la jurisprudencia factores de corrección del lucro cesante, y que dice relación con los gastos de vivienda, traslado y de alimentación, y todos aquellos gastos que realiza una



persona normal que vive en nuestra sociedad para poder prestar sus servicios, también denominados gastos por coste de vida. Se deben tener aquí en cuenta especialmente los actuales factores de endeudamiento de la población que vive en nuestro país. En efecto, los factores de corrección no son otra cosa que la búsqueda de la utilidad, esto es, de la esencia misma del lucro cesante. Por tanto, se deben tener en cuenta especialmente la situación real -no la hipotética de los profesionales en nuestra sociedad, y en este análisis juega un punto especialmente relevante los niveles de endeudamiento en los que se encuentra la población, ciertamente considerando los distintos niveles de ingreso. La sentencia de marras incurre en el vicio de nulidad que se alega al infringir la máxima de experiencia antes señalada a la hora de establecer el quantum a indemnizar por concepto de lucro cesante.

Afirma que al considerar el monto por lucro cesante, la sentenciadora infringe en forma manifiesta las normas sobre apreciación de la sana crítica. En efecto, en la sentencia infringe las máximas de la experiencia al no considerar los factores de corrección del lucro cesante consistente en los gastos por coste de vida, y que para calcular la pérdida de ganancia se debe tener en cuenta la máxima de experiencia que señala que el salario implica necesariamente la realización de gastos para obtenerlo; por lo que la sentenciadora debió de haber considerado en el cálculo del monto a indemnizar por concepto de lucro cesante la máxima de experiencia que señala que todo ingreso conlleva, para producirlo, necesariamente un gasto, y, aplicar al monto que se establece como pérdida de ganancia una reducción de a lo menos un 60% por concepto de gastos por costes de vida, por lo que todo ingreso



conlleve, para producirlo, necesariamente un gasto, y la sentenciadora habría reducido el monto a indemnizar por lucro cesante en a lo menos un 60%.

**VIGESIMOCUARTO:** Que también invoca la causal de nulidad del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, esto es, *"cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior"*; ya que la sentencia recurrida acoge la excepción opuesta por las partes y califica la conducta de don Francisco Olivares como *"exposición imprudente al daño"*, pero a la hora de valorar dicha exposición la sentencia incurre en el vicio de nulidad antes alegado, pues se hace necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos asentados por el tribunal en lo relativo únicamente a la valoración del grado de exposición imprudente en que incurre el trabajador fallecido.

Afirma que la sentencia realiza una calificación jurídica errónea en la parte resolutive al valorar la reducción en un 50%, ya que dicha valoración no incorpora los elementos normativos necesarios para apreciar la conexión causal de la acción/omisión de la víctima en el daño.

Que en el considerando cuadragésimo segundo se establece la existencia de dos hechos, a saber, (1) *"se acercó indebidamente a un equipo que no había desenergizado"* y (2) *"debido a que existía un desnivel en la base que soportaba en Inversor en el que había estado trabajando, lo tocó casualmente con el dorso de su mano"*

Afirma que los hechos antes señalados no pueden considerarse como iguales o equivalentes, pues en el primero se aprecia en forma preeminente una conexión causal





respecto del daño. En efecto, la desenergización del equipo tiene una influencia causal preeminente respecto del otro hecho. Considere en este sentido, que la desenergización es una obligación contractual primordial, una regla de oro de la prevención de riesgos, pues se trata de la primerísima regla a aplicar al tratar con un equipo, más aun considerando que es un hecho asentado en la causa que el señor Olivares Villena estaba capacitado, que conocía el procedimiento y que era un ingeniero calificado, por lo que no pueden mirarse como equivalentes los hechos en los que se funda la "reducción" que realiza la sentenciadora en los considerandos cuadragésimo primero y segundo, porque no se trata de hechos que admitan ser valorados como equivalentes.

Concluye que la calificación jurídica de la reducción de los montos a indemnizar en un 50% de su valor debe ser alterada, toda vez que dicha valoración no se condice con los elementos fácticos que se dan por asentados en la sentencia, pues considera como equivalentes hechos que no lo son, de forma que el porcentaje o monto de la reducción debe aumentarse, por tener el hecho que se atribuye al señor Olivares una preeminencia causal en la producción del daño por sobre el hecho que se atribuye a las demandadas, de modo que el monto de reducción debe ser aumentado pues la desenergización del equipo tiene una influencia causal preeminente respecto del otro hecho que se atribuye a la demandada a la hora de sentar las bases fácticas de la valoración, y considera que se debe calificar jurídica la exposición imprudente considerando una reducción no menor que un 80% del monto de condena, lo que debió aplicarse a los montos a indemnizar por daño moral y lucro cesante.

**VIGESIMOQUINTO:** Que en lo que respecta a la causal de



infracción de las normas sobre valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, tanto en lo que respecta a la determinación del monto por las indemnizaciones por daño moral como por el lucro cesante, nos remitimos a lo ya razonado en la presente sentencia en los motivos decimoséptimo a vigésimo para acoger el recurso deducido por iguales causales por la demandada BIOSAR CHILE SpA., por ser plenamente aplicables tales razonamientos y conclusiones, en la resolución del recurso interpuesto por la demandada ABB S.A.

En consecuencia, procede acoger también el recurso de ABB S.A. en lo referido a la determinación del monto por daño moral, y se omite pronunciamiento respecto de la misma causal, en cuanto al monto del lucro cesante.

**VIGESIMOSEXTO:** Que en cuanto a la causal del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, esto es, *"cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior"*; tal motivo de nulidad no resulta procedente, ya que mediante tal arbitrio el recurrente pretende que se le otorgue un carácter de mayor gravedad a la acción del trabajador fallecido, que a las falencias de seguridad imputables a la empresa, lo que lleva necesariamente a una alteración de los aspectos fácticos del fallo recurrido, siendo en consecuencia improcedente el motivo de nulidad en análisis.

Por estas consideraciones y conforme con lo dispuesto en los artículos 477, 478 letra b), 479 y 482 del Código del Trabajo, se declara:

I.- Que **se acogen los recursos de nulidad** en lo que a la causal de la letra b) del artículo 478 se refiere, deducidos por el abogado Alonso García Echegoyen, en



representación de la demandada BIOSAR CHILE S.p.A. y por el Abogado Orlando Poblete Ortúzar, en representación de la sociedad demandada ABB S.A., en contra de la sentencia definitiva de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dictada por la jueza Yohana María Chávez Castillo del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, la que por consiguiente **es nula**, y se remplaza por la que se dicta a continuación, separadamente, sin nueva audiencia, con esta misma fecha.

Se deja constancia que se hizo uso de la facultad conferida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro Eric Sepúlveda Casanova, quien no firma por encontrarse con permiso.

**Rol 134-2023 Reforma Laboral**





**Dinko Antonio Franulic Cetinic**

Ministro

Corte de Apelaciones

Treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés  
09:21 UTC-4



**Luisa Ida Cortés Sánchez**

Abogado

Corte de Apelaciones

Treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés  
10:50 UTC-4



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XZEXXHTZBXK

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por Ministro Dinko Franulic C. y Abogada Integrante Luisa Ida Cortes S. Antofagasta, treinta y uno de agosto de dos mil veintitres.

En Antofagasta, a treinta y uno de agosto de dos mil veintitres, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XZEXXHTZBXK

**Sentencia de reemplazo.**

Antofagasta treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés.

En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de nulidad precedente y de conformidad a lo previsto en el artículo 478 del Código del Trabajo, se procede a dictar la siguiente sentencia de reemplazo.

**VISTOS:**

Se reproduce la sentencia en alzada de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dictada en los autos RIT 0-1446-2018 del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, con excepción de los considerandos 38°, 39° y 40° que se eliminan.

**Y se tiene en su lugar, y, además, presente:**

**PRIMERO:** Que teniendo en consideración lo expresado en los motivos decimoséptimo y vigesimoquinto del fallo de nulidad, los que se reproducen para evitar repeticiones innecesarias, el establecimiento mediante los medios de prueba legales de la existencia del daño moral sufrido por el trabajador fallecido y que transmitió a sus herederos, los montos regulados en distintas sentencias, conforme al baremo confeccionado por encargo de la Excm. Corte Suprema respecto de la regulación del daño moral en los diversos fallos dictados por nuestros tribunales y las consecuencias sufridas por el trabajador a raíz del accidente, en que se imputa responsabilidad de las empleadoras demandadas.

Teniendo en cuenta además, que la empresa EDF en Chile SpA que fue demandada en esta causa, pagó a los actores la suma de \$120.000.000.- en virtud de una transacción, lo que también marca un parámetro a considerar para establecer el monto total de la indemnización, es posible determinar que una indemnización por daño moral ajustada a los parámetros referidos se satisface con la suma de \$360.000.000.-



(trecientos sesenta millones de pesos).

**SEGUNDO:** Que a la suma indicada debe descontarse los \$120.000.000 que pagó la primitiva demandada EDF, conforme se razonó en los motivos séptimo y décimo del fallo de nulidad; y la suma resultante de \$240.000.000.- debe reducirse en un 50% según ha quedado establecido en estos autos, en razón de la aplicación del artículo 2330 del Código Civil por exposición al riesgo, por lo que la suma total a indemnizar por concepto de daño moral por las demandadas ABB S.A. y BIOSAR CHILE SpA, asciende a la cantidad de \$120.000.000.

**TERCERO:** Que conforme se razonó en los motivos decimoctavo a vigésimo del fallo de nulidad, se rechazará la demanda en cuanto pretende el pago de lucro cesante.

**CUARTO:** Que las restantes consideraciones y conclusiones de la sentencia reproducida, no se ven afectadas por vicio alguno contemplado en alguna causal legal de nulidad laboral.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 1, 160, 163, 168, 171, 172, 184, 420, 425, 439, 445, 455, 456 y 458 del Código del Trabajo, 144 y 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, 53 y 69 de la ley 16.744 y 1558, 1698, 2330 del Código Civil y demás normas pertinentes, se declara:

I.- **Se acoge** la demanda deducida por el abogado Antonio Fernando Rojas Araya, en representación de SERGIO FRANCISCO OLIVARES CASTILLO y MARÍA CRISTINA VILLENA CARRILLO, en su calidad de herederos del trabajador fallecido FRANCISCO ESTEBAN OLIVARES VILLENA, seguida en contra de ASEA BROWN BOVERI S.A. ("ABB S.A.") representada por José Roberto De Paiva, y en contra de BIOSAR CHILE SpA ("BIOSAR"), representada por José Herrera Ahumada, todos ya individualizados, solo en cuanto se condena a las demandadas a pagar a los actores la suma de \$120.000.000.- a título de



indemnización por daño moral.

II.- **Se rechaza** la demanda en cuanto se pretende el pago de indemnización de perjuicios por lucro cesante.

III.- La suma antes referida deberá liquidarse en conformidad a lo establecido en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

III.- Cada parte asumirá sus costas.

Se deja constancia que se hizo uso de la facultad conferida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Eric Sepúlveda Casanova, quien no firma por encontrarse con permiso.

**Rol 134-2023 (Reforma Laboral)**



**Dinko Antonio Franulic Cetinic**

Ministro

Corte de Apelaciones

Treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés  
09:21 UTC-4



**Luisa Ida Cortés Sánchez**

Abogado

Corte de Apelaciones

Treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés  
10:50 UTC-4



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XNPSXHXZBXX



Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por Ministro Dinko Franulic C. y Abogada Integrante Luisa Ida Cortes S. Antofagasta, treinta y uno de agosto de dos mil veintitres.

En Antofagasta, a treinta y uno de agosto de dos mil veintitres, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XNPSXHXZBXX